

C.A. de Santiago

Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece el abogado Ignacio Alejandro Avendaño Leyton, en representación de Catalina Leal Salinas, interponiendo recurso de protección en contra de la Asociación de Funcionarios de la Salud, Dirección de Atención Primaria S.M.C., por haber rechazado arbitrariamente su solicitud de afiliación a dicha asociación gremial. Actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que la decisión carece de fundamentación racional y objetiva, no ajustándose al propio estatuto de la asociación recurrida, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad de asociación y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a la recurrida afiliarse a la recurrente y otorgarle todos los beneficios correspondientes como asociada.

Expone que Catalina Leal Salinas es médica cirujana, quien presta servicios profesionales en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Dr. Eduardo Ahués, ubicado en la comuna de Maipú, desde el 6 de junio de 2022, en calidad de contrata y cumpliendo un total de 44 horas semanales. Asimismo, señala que dicho CESFAM forma parte de la red de atención del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Indica que decidió voluntariamente afiliarse a la Asociación de Funcionarios de la Salud, Dirección de Atención Primaria S.M.C., entidad que le correspondía por el lugar donde desempeñaba sus funciones y porque varios de sus colegas médicos se encontraban afiliados a la señalada asociación.

Destaca que Catalina Leal Salinas cumplía con los requisitos para afiliarse a la referida asociación, toda vez que conforme al artículo 24 del Estatuto de la Asociación de Funcionarios de Salud, pueden pertenecer a esta asociación los funcionarios titulares y contratados que se desempeñen en todos los CESFAM y CES dependientes de la Dirección de Atención Primaria. En razón de ello, cumpliendo con el principal y único requisito para afiliarse, un colega médico le indicó



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NCPXXXFLWXR

que debía enviar un correo electrónico solicitando su incorporación, lo que realizó a finales del mes de junio de 2024.

Al no obtener respuesta, insistió enviando dos nuevos correos los días 8 y 11 de julio de 2024. Sin embargo, tampoco obtuvo respuesta, lo que la motivó a enviar un cuarto correo el 12 de agosto de 2024. Finalmente, el 9 de octubre de ese mismo año se le respondió el correo electrónico rechazando su incorporación, indicándosele que tenían una asociada que había tenido atenciones en ISL y causa pendiente con la solicitante y otro médico, manifestando que no podían incorporarla por presentarse un conflicto de intereses.

Argumenta que la Asociación de Funcionarios de Salud ha incurrido en una conducta ilegal y arbitraria, por cuanto la decisión tomada carece de toda motivación racional y no se ajusta a su propio estatuto. En efecto, sostiene que la comunicación de rechazo es vaga e imprecisa, toda vez que no existe desarrollo del fundamento de la decisión.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, la recurrente alega que se ha violentado la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues se le negó su ingreso a la asociación sin que exista causal expresa para tales efectos, generándose un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios que sí pueden afiliarse. Del mismo modo, sostiene que se ha vulnerado el derecho de asociación consagrado en el artículo 19 N° 15 de la Carta Fundamental, por cuanto se priva a la afectada de su facultad para afiliarse a una asociación de funcionarios, sin que exista impedimento legal o estatutario para rechazar la afiliación. Finalmente, arguye que se ha infringido la garantía del derecho de propiedad establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, toda vez que se priva a la afectada del derecho a afiliarse a la recurrida y a los beneficios que conlleva tal incorporación.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida afiliar a Catalina Leal Salinas a la asociación de funcionarios de la salud antes individualizada, debiendo en consecuencia recibir todos los beneficios que le correspondan como asociada, con costas.



Evacúa informe Ana Luisa Rodríguez Rabin, en su calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud, Dirección de Atención Primaria S.M.C., y expone que conforme los estatutos que rigen la asociación que representa vigentes desde 25 de octubre de 2013, su Título V, denominado "DE LOS SOCIOS", específicamente el artículo 24° inciso segundo existe un procedimiento predefinido para la incorporación de funcionarios que laboran en CESFAM y CES y que, no siendo socios fundadores, soliciten su incorporación a la organización. Precisa que dicho cuerpo normativo establece que pueden pertenecer a la asociación los funcionarios titulares y contratados que se desempeñen en todos los CESFAM y CES dependientes de la Dirección Primaria.

Asimismo, destaca que para ingresar a la asociación, el interesado debe presentar una solicitud al secretario de la organización, la cual es considerada por el directorio, quedando el ingreso o rechazo sujeto a un acuerdo por mayoría de los integrantes del directorio. En consecuencia, sostiene que la afiliación no se produce automáticamente, sino que es sometida a una evaluación interna por parte del directorio, quien realiza un examen de admisibilidad de la solicitud.

Respecto de la solicitud de afiliación de la recurrente, la informante indica que ésta hizo llegar correos electrónicos a la directiva planteando su interés por formar parte de la asociación, sin utilizar el procedimiento definido para ello, con fechas 28 de junio y 8 de julio de 2024. No obstante lo anterior, refiere que en asamblea ordinaria del 5 de septiembre de 2024 se acordaron los criterios de admisibilidad aplicables a funcionarios que soliciten afiliación al gremio, determinándose, entre otros, el criterio de no aceptar afiliaciones de funcionarios que mantengan conflictos graves de convivencia sin solución con afiliados activos de la organización.

Posteriormente, en reunión del directorio del 2 de octubre de 2024, instancia colegiada que contó con la presencia del equipo directivo completo, se procedió a evaluar la solicitud de afiliación de la señora Leal Salinas. Para tal efecto, se ponderaron antecedentes obtenidos y validados con compañeros del mismo centro, evidenciándose un grave problema interpersonal suscitado con la funcionaria Carolina Andrea Córdova Farías, encargada del Programa



Adulto de base CESFAM Chuchunco. En virtud de lo anterior y del mandato establecido por la asamblea del 5 de septiembre de 2024, se procedió a votar por la aceptación o negativa del requerimiento, rechazándose por mayoría absoluta de los integrantes la afiliación al gremio. El rechazo y sus fundamentos fueron entregados verbalmente y mediante correo electrónico del 9 de octubre de 2024.

La informante invoca el derecho a la libertad sindical como principio rector, citando la Declaración Universal de Derechos Humanos y señalando que la libertad sindical es un derecho fundamental que comprende tanto derechos individuales como colectivos. Destaca la libertad sindical procedimental relacionada con la forma y procedimientos que debe seguir una organización para su constitución y funcionamiento, así como los principios específicos emanados del Convenio 87 de la OIT.

Asimismo, esgrime las normas constitucionales que regulan la libertad sindical, particularmente el artículo 1º inciso tercero de la Constitución Política, que reconoce y ampara a los grupos intermedios, garantizándoles adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. También cita el artículo 19 N°19 que contempla mecanismos que aseguran la autonomía de estas organizaciones.

También se refiere a la legislación específica contenida en la Ley N° 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, particularmente su artículo 14 que establece que las asociaciones se regirán por dicha ley, su reglamento y los estatutos que aprobaren.

Ampliando los términos del informe, de acuerdo con la solicitud de precisión en orden a expresar los motivos y causal estatutaria de rechazo de la solicitud de incorporación de la recurrente, la recurrida sostiene que el rechazo a la solicitud de afiliación se encuentra plenamente justificado conforme a los estatutos que rigen la organización y a los principios de la libertad sindical.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede la acción cautelar de protección a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NCPXXXFLWXR

o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, con el fin de impetrar del órgano jurisdiccional la adopción inmediata de las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho y carente de razonabilidad en el actuar, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad perseguida; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, en el presente caso, el acto que la parte recurrente estima ilegal y arbitrario consiste en habersele negado la afiliación respecto de la Asociación de Funcionarios de la Salud, Dirección de Atención Primaria S.M.C.

Tercero: Que son hechos no controvertidos que con fecha 28 de julio de 2024, la actora, Catalina Leal Salinas, hizo llegar un correo a la directiva de la organización recurrida para manifestar su interés en formar parte de esa entidad. En reunión de 5 de octubre de ese año, el directorio analizó dicha petición de afiliación con la participación de todos sus integrantes, a saber, presidenta, tesorera y secretaria, no obstante que la reclamante no cumplió con el trámite formal previsto en los estatutos de enviar un formulario de afiliación predefinido a la secretaría del gremio.

Cuarto: Que en aquella reunión se evaluó la información proporcionada por la funcionaria solicitante y el relato entregada por otra funcionaria -debidamente individualizada-, quien les hizo saber conflictos interpersonales vigentes con la recurrente. Ante tales antecedentes, el directorio determinó rechazar la petición de afiliación -tres votos por la negativa y cero votos por la aceptación-, aduciendo para ello lo establecido en los estatutos en orden a resguardar la armonía en las relaciones internas de la asociación. Esta decisión le fue comunicada a la interesada personalmente y mediante correo electrónico.



Quinto: Que con arreglo al artículo 24 de los estatutos de la Asociación de Funcionarios de la Salud, Dirección de Atención Primaria S.M.C., existe un procedimiento para gestionar la incorporación de los funcionarios que deseen pertenecer a dicha organización base. Esta solicitud es revisada por el directorio y quedará sujeta a un acuerdo por la mayoría de sus integrantes para su aceptación o rechazo. Establece el citado precepto: *“El acuerdo de aceptación o rechazo será tomado por la mayoría del directorio dejándose constancia en el acta. Si no se acepta el ingreso del postulante, se indicarán en el acta las razones del rechazo y además, se comunicará por escrito, dentro de los 5 días siguientes al del acuerdo al candidato a socio y el fundamento que lo motiva. Si el postulante estimare que el rechazo no fue debidamente fundado, podrá reclamar ante el Tribunal respectivo”*.

Sexto: Que según da cuenta la documentación acompañada, a la actora se le indicó la razón por la cual se rechazaba su solicitud de afiliación, si bien escueta, suficientemente ilustrativa para que aquella conociera el fundamento de la negativa, y pudiera refutarla ante el mismo órgano que los estatutos de la asociación prevé al efecto, impugnación que se desconoce si realizó.

Séptimo: Que cabe tener presente también que en asamblea llevada a cabo el 5 de septiembre de 2024 se adoptó, entre otros acuerdos, el criterio de no aceptar afiliaciones de funcionarios que mantuvieran conflictos graves de convivencia con afiliados activos de la asociación. Y con arreglo al artículo 35 de la Ley N° 19.296 de 1994, de Asociaciones de Funcionarios, *“La asamblea será el órgano resolutorio superior de la asociación y estará constituida por la reunión de sus afiliados”*.

Octavo: Que es pertinente asimismo consignar que el artículo 1° inciso tercero de nuestra Constitución Política dispone que: *“El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”*, revistiendo las asociaciones de funcionarios dicha calidad o condición, asegurándoles la necesaria autonomía para perseguir sus propios fines, dictar sus estatutos, elegir a sus representantes, etc.



Noveno: Que, así las cosas, la asociación recurrida ha actuado dentro del marco legal y estatutario que la rige, determinando el rechazo de la afiliación de la reclamante, decisión que aparece adecuadamente motivada.

Décimo: Que en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos que hacen procedente esta acción de protección, debe necesariamente concluirse que el recurso intentado ha de ser declarado sin lugar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, **se rechaza**, sin costas, el recurso de protección deducido por Catalina Leal Salinas en contra de la Asociación de Funcionarios de la Salud, Dirección de Atención Primaria S.M.C..

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol N° 21.629-2024.

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, el ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo. No firma el abogado integrante señor Hernández, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NCPXXXFLWXR

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Guillermo E. De La Barra D. y Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

